EL GASTO PÚBLICO EN ARGENTINA

Un debate recurrente

A lo largo de décadas el debate sobre el gasto público reaparece una y otra vez en la sociedad argentina. Quienes más se han ocupado del tema son los sectores de orientación neoliberal, para quienes la dimensión del gasto público es el origen de todos los males de la economía argentina.

En los ochenta adjudicaron al volumen desmedido del gasto, la causa de la hiperinflación de fines de esa década. En los '90, aunque apoyaron de manera decidida el modelo de la convertibilidad, a la hora de explicar las causas de su crisis, la imputaron a un aumento del gasto. Ahora, en la primera década del siglo XXI, al reaparecer algunos indicios inflacionarios, vuelven a embestir con el mismo argumento.

Sin embargo, debemos resaltar que existe un sutil cambio en el argumento. Las críticas fueron variando desde el volumen absoluto de ese indicador en los '80 al crecimiento relativo del gasto en los '90 y en la actualidad

El cambio se debe a que se modificaron las condiciones culturales sobre la información económica en Argentina. En los '80, no era habitual su difusión masiva, y menos aún la información internacional a fin de establecer comparaciones.

Por aquellos años, las usinas neoliberales dieron a conocer estudios realizados en gran escala sobre el gasto público en Argentina. Pero esos trabajos tenían dos características cruciales que los invalidaban: por una parte, no utilizaron los criterios internacionales para medir el gasto público. Por la otra, no realizaron comparaciones internacionales. Ambas falencias estaban fuertemente interrelacionadas. Si se realizaban las comparaciones internacionales, cualquier lector avisado se hubiese preguntado cuales eran las bases de la comparación y allí hubiese aparecido el otro factor: los criterios de cómputo. Y esos criterios estaban seriamente afectados:

a) Se tomó el gasto agregado de los tres niveles jurisdiccionales (Nación-Provincias-Municipio) sin realizar técnicas de consolidación alguna. Con ello, el monto total de la coparticipación nacional se imputaba como gasto y ese gasto se volvía a repetir en las provincias. De la misma manera con la coparticipación provincial hacia los municipios.

b) Se tomó las empresas públicas (por aquellos años dominantes en varias ramas de actividad) por el volumen total de las operaciones. Es decir, allí el “gasto público” se tomaba por el costo total, cuando esa operatoria era financiada en gran parte con precios privados. Es por ello que en aquella época y en la actualidad, la recomendación técnica de los organismos internacionales (ONU, FMI, etc.) es, en el caso de empresas públicas, tomar como gasto público el aporte de capital que realiza la administración central para cubrir la inversión y/o déficit de esas empresas.

El gasto se multiplicaba hasta el infinito y sin dudas lograron su objetivo. Sobre todo, si lo medimos por lo que sucedió en los '90, cuando numerosos sectores de opinión, apoyaron un proceso de privatización indiscriminado.

Aunque no se realizaban estudios comparativos del gasto público, junto a esta información distorsionada, se difundió la idea de países desarrollados (el “primer mundo”) con una característica fundamental: una muy baja participación del Estado en la economía y por ende, el principal factor que hacía posible un alto nivel de ingreso por habitante.

Pero los años pasaron y poco a poco, azuzada por los graves problemas que atravesó la economía argentina, la sociedad se interesó en la información económica. Y comenzó a difundirse información sobre los niveles comparados de gasto público. No sólo aquellos eran muy superiores, sino que por el contrario, la característica fundamental del gasto público en Argentina era su bajo nivel de participación respecto al prevaleciente en los países industrializados.

Es por eso que ya no se pone el acento en la dimensión absoluta del gasto público sino en su constante crecimiento. Pero ahora también se introduce una trampa metodológica. No diferencian los factores aparentes y reales del crecimiento del gasto público. Y ese gasto crece de manera aparente por factores monetarios, variación de la riqueza y variación de la población.

Es indudable que justificar el crecimiento del gasto sobre la base de comparar valores nominales sería muy burdo. Plantean el crecimiento a valores constantes, pero ignoran que los servicios del gobierno deben ser deflactados no sólo por el patrón monetario, sino también por el crecimiento de la riqueza y de la población que exigen una ampliación de los servicios del Estado.

En el mes de Setiembre de este año, el Ministerio de Economía dio a conocer un trabajo de sistematización de la información del gasto público en el largo plazo. Cubre el periodo 1980-2006 y es una magnífica oportunidad para verificar los fundamentos de este debate.

La evolución del gasto público

Desde el S. XVIII y hasta bien entrado el S. XX, (primera guerra mundial), el pensamiento liberal fue dominante en esta materia.

El criterio básico fue el de un “Estado Gendarme”. El Estado sólo debía cubrir los bienes públicos “puros” (defensa nacional, seguridad interna, justicia, relaciones exteriores). Un gasto mayor exigiría impuestos o bien un déficit fiscal permanente que distorsionaría los precios en un mercado libre. El crédito público sólo debería cubrir necesidades surgidas de situaciones de emergencia (desastre naturales, guerras) o bien obras públicas con efectos sobre sucesivas generaciones que deberían hacer frente a los servicios de la deuda

Sin embargo, no deberíamos extraer como conclusión que la concepción liberal en economía se oponía al gasto social. El problema real radica en que ese tipo de gasto (educación, salud, etc.), en aquel contexto, no implicaba demanda social alguna.

Pero las nuevas condiciones, tales como crisis económicas agudas que envolvían al planeta –los ´90 del siglo XIX - y la aparición de un nuevo fenómeno político, las guerras generalizadas (1914-18), hicieron posible que estas pautas fueran abandonadas. La crisis de los años ´30 y la segunda guerra mundial (1939-1945), no sólo ratificaron la desaparición de las ideas liberales sino que comenzó a prevalecer el criterio inverso: había que profundizar la intervención del estado. Las actitudes de los grupos de opinión frente al Estado se modificaron de manera radical. Prevalció el convencimiento que la falla residía en los mercados y se generaron presiones sociales para el Estado actuara.

Estas nuevas ideas comenzaron a sistematizarse. El economista inglés J. M. Keynes realizó un enfoque macroeconómico y concluyó que el Estado debía intervenir, por lo menos, mientras dure el ciclo recesivo. Y la intervención debía darse de manera directa, es decir tomando medidas sobre las variables de empleo e inversión que habían comenzado a sistematizarse en la teoría económica a partir de sus escritos.

Sin embargo, debemos tener en cuenta que estas ideas no surgían en un vacío, sino que estaban reflejando la acción real que ya realizaban los Estados. Sólo generaban un marco teórico para justificar una realidad ya existente.

Una realidad caracterizada por la acción directa del Estado. Tanto gasto en obras públicas consideradas prioritarias desde el punto de vista de la necesidad de dar un impulso a la economía, como normas tendiente a paliar los problemas sociales: sistemas de previsión social, subsidios a desocupados, leyes laborales, o bien, fuertes regulaciones en los sectores de actividad mas críticos: precios sostén en la agricultura, garantía de depósitos en el sistema financiero, controles en las bolsas de valores, etc.

Lo más significativo es que estas políticas se implementan por primera vez de manera integral, nada menos que en los EEUU de los ´30 a través de la política del “New Deal” del Presidente Roosevelt.

Tras la segunda guerra mundial, se pasó, de criterios de intervención del Estado en condiciones de emergencia, a los de una política activa, permanente y sistemática. En los países europeos, la política social del Estado se convirtió en el eje de toda la política económica. Aparece la concepción del “Estado del Bienestar”.

Sin embargo, no trataba de un mero e ingenuo voluntarismo social. Por aquellos años la característica fundamental del sistema económico era la producción industrial orientada hacia el consumo masivo. Y esta política resulta funcional a los objetivos del modelo productivo.

Las políticas de “Estado de Bienestar” se orientaban a que cada habitante debía tener la mayor seguridad económica y social posible con el objetivo de lograr su tranquilidad. Para ello el Estado debía resolver al ciudadano todas sus imprevisibilidades, “desde la cuna hasta la tumba”.

El objetivo económico era muy claro. Con esas condiciones destinaría toda mejora de su ingreso al consumo de bienes superiores: automóviles, construcción de la vivienda propia, electrodomésticos, etc.

Con este sentido, los países europeos desarrollan políticas sociales en gran escala: sistemas de previsión social, seguros de salud, subsidios por desempleo y capacitación profesional. De esta forma, el individuo no tiene que ahorrar para cubrir futuros imprevistos y contribuye a elevar el consumo global por vía de bienes más complejos que la mera alimentación y vestido.

Por eso no es extraño observar en la estructura actual del gasto público de algunos países desarrollados que los gastos en seguridad social cubren un espectro de entre el 40 y el 70 % del total del presupuesto y explica el alto grado de presencia del Estado en países desarrollados.

Pero el alto nivel de gasto público tiene otras fuentes históricas. También luego de la segunda guerra mundial se generó en los países europeos una fuerte corriente de nacionalización de empresas. La necesidad de actualizar tecnológicamente las áreas de servicios de infraestructura (comunicaciones, puertos, ferrocarriles, energía) y sectores productivos claves (siderurgia, astilleros) que eran claves para el crecimiento económico chocó con empresarios que no estaban dispuestos a realizar las inversiones necesarias y se procedió a su transferencia al Estado. Nada menos que Inglaterra lideró esta tendencia en la posguerra.

El tercer elemento que contribuyó al desarrollo del papel del Estado también fue una consecuencia de la destrucción masiva de los países europeos en la guerra 1939-1945. Pero esta vez el objetivo fue político. Se consideraba de alto riesgo las precarias condiciones sociales y económicas de la Europa de posguerra, frente a los avances políticos del área “socialista” (Ex-URSS y su área de influencia). Se debía salir de esas condiciones lo antes posible tratando de reconstruir los países de Europa. Y para ello se instrumentó una transferencia internacional de recursos en gran escala. Fue la operación conocida como “Plan Marshall” que también influyó de manera decidida en el incremento de la dimensión del sector público en la mayoría de los países que hoy se conocen como desarrollados.

Con estos elementos motores, el sector público asume una dimensión que hasta ese momento nunca había tenido. Y desde allí hasta los ‘80, estamos en presencia de un sector público creciente y activo en los países desarrollados.

En trabajos del Banco Mundial puede apreciarse el crecimiento de largo y muy largo plazo en el mundo desarrollado. Uno de ellos, del año 1991 (Informe sobre el Desarrollo Mundial) sobre el crecimiento del gasto en países seleccionados concluye que entre 1880 y 1985, en países como Estados Unidos y en Suecia, el gasto en términos del PBI creció del 8 % al 37 % y del 6 % al 65 % respectivamente.

Tomando el largo plazo, verifican que en el periodo 1960-1995, el tamaño del sector público, medido por el gasto, en los países industrializados, se duplicó. (Informe Económico Mundial, año 1997).

También fue espectacular el crecimiento del gasto público en el mundo no desarrollado, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Sin embargo, allí intervinieron, además de los factores que lo impulsaron en el primer mundo, otras cuestiones tales como la soberanía política y la independencia económica.

Esta tendencia, a partir de los años '80 tiene un doble freno. Por una parte, un freno político. A partir de ese periodo, los sectores neoliberales, en continuidad con el pensamiento clásico en economía plantean la oposición al esquema keynesiano del Estado. Esto tuvo su máxima expresión en los Estados Unidos bajo la presidencia de Ronald Reagan y en el Reino Unido bajo la conducción de la Primera Ministra Margaret Thatcher

La otra limitación surgió de una fuerte tendencia al déficit en el balance fiscal de los países desarrollados financiado con crédito público. Las tasas de interés se elevaron de manera pronunciada por sobre los niveles históricos y surgía la problemática del costo de financiar déficit y el capital a aportar a las empresas públicas.

El gasto público que en esos países había llegado a niveles del 45-55% del PBI, se redujeron de manera moderada a niveles de entre el 40-50% del PBI y representan sus valores actuales.

Pero si estos son los niveles luego de su reducción, porque entonces asustarse de niveles de alrededor del 30 % de países como Chile y Argentina e incluso niveles cercanos al 40 % como en Brasil.

La difusión de este tipo de datos comparativos ha hecho posible que los argumentos empleados en los '80 y en los '90, respecto a la necesidad de reducir el valor absoluto del gasto público en Argentina, ya no se repitan. Decir en la actualidad que en el primer mundo existe una prescindencia del sector público, significaría caer en el ridículo.

Ahora, con una sutil diferencia, el argumento ensayado ya no es el volumen absoluto sino el “incremento sostenido del gasto público”. Veamos entonces que dicen las cifras sobre ello.

El gasto público en cifras

El trabajo recientemente publicado por el Ministerio de Economía cubre el gasto público consolidado de las tres jurisdicciones (Nación-Provincia-Municipio y abarca el periodo 1980-2006. El contenido del gasto está desarrollado bajo la clasificación “Finalidad-Función” y se presenta en valores bajo tres formas: a valores constantes, a valores corrientes y en porcentaje del PBI.

Los valores constantes se han logrado mediante la transformación de valores corrientes a pesos del año 2001, tomando como deflactor el índice combinado de precios al consumidor y mayorista por partes iguales.

El gasto público consolidado

Presentamos la serie completa del periodo en el Anexo I donde hemos incluido un cuadro con la información anual, a cuyo pie se han agregado los periodos representativos a fin de aislar la información de los periodos de crisis que perturbaría el análisis.

Los periodos y su justificación son los siguientes:

- 1980-88: representativo de la década de los '80;

- 1989-90: computados por separado pues la hiperinflación licuó los valores y por su bajo nivel no son representativos;
- 1991-2001: representa los ´90 y es homogéneo por la política económica en el periodo;
- 2002-2005: separado del resto pues abarca el periodo de crisis y recuperación del gasto;
- 2006: el más alto de últimos años y representativo del periodo actual.

Luego, introducimos la variación entre los periodos representativos. Entre los ´90 y los ´80; entre el año 2006 y los ´90 y entre el mismo año 2006 y los ´80

Recordemos los interrogantes a los que buscamos respuesta: ¿la crisis de la convertibilidad fue debido a un crecimiento del gasto en los ´90?; ¿actualmente está creciendo el gasto por sobre los niveles históricos?

Veamos que responden a esto las variaciones del Anexo I. Si tomamos la columna del gasto a valores constantes observamos en principio una variación importante:

- 20,77 % entre los ´90 y los ´80
- 11,14 % entre 2006 y los ´90
- 34,22 acumulado entre ambos periodos:2006 y los ´80

Por ser aumentos con el factor inflación ya deflactado, los aumentos son importantes. Sin embargo falta introducir dos ajustes alternativos, los que hacen al factor población y al factor riqueza. Ambas variables traccionan por sí mismas el gasto, mas allá de las decisiones de la administración de gobierno. Se trata de cubrir las necesidades de una población cada vez mayor y de servicios para una economía que se reduce o se amplía, reflejada en el ritmo de variación del PBI. En ambos casos, las variaciones entre sub-periodos y entre puntas disminuyen de manera sensible. Las variaciones a lo largo del periodo se han transformado en muy pequeñas.

Incluso podemos observar a ojo desnudo a lo largo de la serie, que el nivel del año 2006 del gasto por habitante, a pesar de su recuperación en los últimos años, aún no ha podido superar el “pico” más alto de los ´80 verificado en el año 1981 ni el del año 1998, el más alto de los años noventa.

Este análisis nos muestra que los niveles de gasto en Argentina en un periodo tan extenso (27 años) prácticamente no se ha modificado. Esto no significa que no se haya modificado su composición por tipo de gasto y el nivel jurisdiccional que lo realiza. Aprovechamos la disponibilidad de este trabajo básico para satisfacer el otro aspecto de nuestra curiosidad: los cambios en la composición del gasto por jurisdicciones y por tipo de gasto, para luego pasar a combinar la composición y la jurisdicción.

El gasto por jurisdicciones

En primer lugar, el gasto global por jurisdicciones. Tomamos para ello dos años característicos. Seleccionamos el año 1986 como representativo de aquellos

años por el nivel de actividad y la relativa estabilidad de las variables macro y lo comparamos con el último año de la serie:

Gasto Público por Jurisdicciones

<i>Año</i>	<i>Nación</i>	<i>Provincias + GCBA (1)</i>	<i>Municipios</i>	<i>Gasto Local (2)</i>	<i>Total</i>
1986	63.08	31.45	5.47	36.92	100.00
2006	49.57	42.65	7.77	50.43	100.00

1): En todos los periodos la estadística de Provincias contiene el gasto de Capital Federal, cualquiera fuese su status jurídico

2): Gasto Local = Provincias +GCBA +Municipios

Aunque el cuadro anterior refleja sólo dos puntos representativos de la serie cronológica, la tendencia a transferir el gasto nacional hacia los gobiernos locales ha sido sistemática. La reducción en la participación del gasto de la jurisdicción nacional ha pasado de niveles del 63,0 - 65,0 % en los años de mayor nivel de gasto en los '80 (1986/88), a niveles del 50,0 - 52,0 % en los años de mayor gasto en los '90 (1998-2001).

Tras estas cifras se encuentra la transferencia de servicios educativos y de salud operada a partir de 1992 y el fenómeno de la duplicación del gasto municipal por las necesidades de servicios de las grandes urbes

El gasto por funciones

Si clasificamos el gasto consolidado por finalidad-función nos encontramos con las siguientes características

Funcionamiento del Estado (Administración General, Justicia, Defensa y Seguridad): de entre 14 - 17 % del total en los '80, creció a niveles del entorno 17- 20 % en los últimos años.

Gasto Social: (educación, salud, sistema previsional, vivienda, infraestructura, trabajo, asistencia social): observamos un crecimiento sistemático en largo plazo. Analizamos sus componentes más importantes: Educación, Salud, Previsión Social.

Educación (comprende todos los niveles educativos + Cultura + Ciencia y Técnica): se observa un crecimiento sistemático en todo el periodo, de alrededor del 10 al 15 %. Actualmente influye en su crecimiento la presencia de la ley de financiamiento educativo que garantiza una tendencia al crecimiento hasta llegar al 6 % del PBI en el 2010, computando el gasto nacional y provincial.

Salud: Creció en los '80 y parte de los '90 entre el 11,0 y el 15,0%. Desde allí hasta la actualidad, se encuentra semi-estancado en niveles del 14-15 %.

Previsión Social: Crece de manera sistemática hasta un nivel del 27,0 % en 1991 y luego decrece lentamente hasta el año 2006 (19,9 %) por efecto del deterioro relativo del haber jubilatorio.

Servicios Económicos (Inversión real directa + transferencia por inversión a otros niveles + subsidios a sectores): su rasgo más característico es la profunda caída en

los '90 (desde niveles del 25,0% en 1984 hasta el 5,0 % en 2001). Y luego su recuperación parcial en línea con el crecimiento actual de la economía. Aunque en el año 2006 llega al 11,4 % aun está muy distante de los niveles alcanzados en los '80. Esto significa un serio proceso de descapitalización del sector público que explica muchas de las crisis que se presentan a diario: energía, radares, inundaciones, etc.

Servicios de la deuda: en la serie estadística resaltan los “picos” previos a las dos mega-crisis de la deuda (1982 y 2001).

Podemos profundizar este análisis cruzando algunos gastos característicos de la clasificación funcional con la distribución jurisdiccional del gasto

Gastos por Función y Jurisdicción

Educación: la estadística resalta una caída en la proporción nacional de este tipo de gasto en un 50 %, mientras se incrementa proporcionalmente en los gobiernos locales. Esto ha sido provocado por dos tendencias: las transferencias del gasto nacional hacia los gobiernos locales que radican en rubros específicos como educación y salud y las exigencias sociales a los grandes municipios del país.

Salud: se presenta un fenómeno similar pero menos agudo que en el caso anterior. La variación (descenso en el nivel nacional y aumento en el nivel local) es de 10 puntos aproximadamente. Estas condiciones diferenciales se deben a que el gasto en salud en los gobiernos locales, históricamente ha sido siempre importante.

Servicios Económicos: hemos visto en las cifras consolidadas una notable caída en los '90. Sin embargo, si tomamos el fenómeno por su clasificación jurisdiccional, encontramos situaciones diferenciales. Mientras que la caída del gasto consolidado es a una quinta parte del registrado en los '80, la del gasto nacional es a la doceava parte. En cambio el gasto provincial cae en menor proporción, a niveles poco menos del 50 % y en el nivel municipal incluso logra aumentar.

Servicios de la deuda: hemos visto en el gasto consolidado que los puntos máximos son previos a las respectivas crisis de la deuda que ocurrieron en este periodo. Y este comportamiento está influenciado por la jurisdicción nacional que conlleva el grueso de este tipo de gasto. Sin embargo a nivel provincial ocurre un fenómeno destacable ya que a pesar de su baja proporción en el gasto consolidado, el crecimiento entre los puntos de mayor incidencia ha sido muy agudo. Mientras en 1982 representaba el 1,5 % del total, ya en el 2001 significaba el 17 % del total. Esto significa que en Provincias + GCBA los pagos de los servicios crecieron en valores reales doce veces.

El papel del gasto público

Ahora debemos volver a nuestros interrogantes, y la respuesta que podemos ofrecer es contundente. Por una parte, el gasto público no está sobredimensionado. Su dimensión en Argentina no es mayor a la de otros países de desarrollo similar. Por la otra, no ha existido un aumento desmesurado, ni en los '90 ni en la actualidad que pueda afectar las variables económicas.

Sin embargo, no debemos concluir de esto que la problemática del gasto público en Argentina resulta satisfactoria. Desgraciadamente el debate ha girado hasta ahora sólo sobre una de las dimensiones del gasto público: su volumen. Pero existe otra dimensión que debemos comenzar a debatir. Es la referida a su eficiencia

En el gasto público nos vamos a encontrar con problemas de administración deficiente, clientelismo político, asistencialismo, prácticas corruptas, y similares que lo convierten en improductivo.

Si en un sector tan importante de la economía, los niveles de productividad son bajos, la productividad global de la economía, no podrá ser compensada por el sector privado y la productividad media de la economía tenderá a disminuir

La polémica alrededor de una salida a estos problemas vía la privatización resulta un falso debate. La mayoría de las actividades del sector público, si el Estado no las realiza no las realiza nadie. O son bienes públicos puros donde no existe rentabilidad posible debido a que no se puede identificar al beneficiario del servicio, o bien son disfunciones (o “fallas”) de mercado tales como externalidades, monopolio natural, o la existencia de información asimétrica. Sólo puede llevarlas adelante el Estado y financiarla con pagos de impuestos.

En Educación p.ej., aunque es un servicio donde es posible identificar el beneficiario, existen externalidades que sólo las puede aprovechar la sociedad en su conjunto y por ello, sólo el Estado en nombre de la sociedad, pueden captar y orientar positivamente esas externalidades.

Entonces, si a la mayoría de esas actividades las debe realizar inevitablemente el Estado, más importante que debatir el volumen del gasto es debatir su eficiencia.

No es casualidad que en Argentina, por décadas, no se haya instrumentado los presupuestos por programa y de base cero que permitirían verificar esa eficiencia por la mera comparación del presupuesto en valores y en unidades físicas.

Sin embargo existen numerosos indicios de la baja eficiencia del gasto público. En los casos de Salud (investigaciones de la Organización Mundial de la Salud) y Educación (Fundación Oxfam) existen comparaciones internacionales que demuestran que aunque el gasto en estos rubros no es bajo, su eficiencia comparada a nivel internacional deja mucho que desear

La recomendación que surge en materia de política fiscal es obvia. En lugar de actuar sobre la magnitud del gasto debemos preocuparnos por mejorar su gestión a fin de cumplir los objetivos fijados al menor costo económico, financiero y social posible.

Octubre 22 de 2007.-

Lic. Daniel Wolovick

Anexo I
ARGENTINA - GASTO PÚBLICO CONSOLIDADO

Año	Gasto Público Consolidado (en % PBI)	Gasto Público Consolidado (mill \$ 2001)	Habitantes (Número)	Gasto Consol. por habitante (en pesos 2001)
1980	29,04	74.545	28.093.507	2.653,46
1981	31,34	78.569	28.524.120	2.754,47
1982	28,05	63.532	28.963.109	2.193,55
1983	25,92	63.218	29.407.972	2.149,68
1984	26,58	65.344	29.856.213	2.188,62
1985	29,95	66.525	30.305.336	2.195,17
1986	32,15	70.980	30.757.601	2.307,71
1987	34,64	78.566	31.214.665	2.516,96
1988	32,17	69.501	31.673.154	2.194,32
1989	31,71	62.370	32.129.676	1.941,21
1990	30,37	59.366	32.580.854	1.822,11
1991	31,04	66.077	33.028.546	2.000,60
1992	31,49	74.339	33.475.005	2.220,74
1993	31,71	79.683	33.917.440	2.349,33
1994	31,82	84.993	34.353.066	2.474,11
1995	32,55	82.564	34.779.096	2.373,95
1996	30,59	80.323	35.195.575	2.282,20
1997	30,36	85.527	35.604.362	2.402,15
1998	30,99	90.181	36.005.387	2.504,65
1999	34,25	96.929	36.398.577	2.663,00
2000	33,80	94.484	36.783.859	2.568,62
2001	35,72	95.969	37.156.195	2.582,84
2002	29,34	60.539	37.515.632	1.613,71
2003	29,48	63.045	37.869.730	1.664,77
2004	28,90	69.313	38.226.051	1.813,24
2005*	31,73	83.019	38.592.150	2.151,19
2006*	32,33	94.073	38.970.611	2.413,96
Promedios				
Prom 80-88	29,98	70.087	29.866.186	2.350,44
<i>Prom 89-90</i>	<i>31,04</i>	<i>60.868</i>	<i>32.355.265</i>	<i>1.881,66</i>
Prom 91-01	32,21	84.643	35.154.283	2.402,02
Prom 02-05	29,86	68.979	38.050.891	1.810,73
Año 2006	32,33	94.073	38.970.611	2.413,96
Variaciones				
Variac. 90-80	7,43	20,77	17,71	2,19
Variac 06-90	0,38	11,14	10,86	0,50
Variac 06-80	7,84	34,22	30,48	2,70

Fuente: Ministerio de Economía